

## **Polarización y violencia en 2004: referendo y “Plan Guarimba”**

Margarita López Maya  
Abril, 2004

Inmersos en una turbulenta atmósfera condicionada por la espera de los resultados que habría de dar el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación al proceso de activación del derecho a solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Chávez, el 27 de febrero estalló en Venezuela una secuencia de protestas confrontacionales, y también violentas que duraron 5 días consecutivos. Este episodio, llamado por algunos “Plan Guarimba”<sup>1</sup>, reeditaría en muchos aspectos el clima de extremada polarización política –con toda su carga de intolerancia, resentimiento y violencia– que la sociedad venezolana, en especial las poblaciones urbanas de Caracas y otras ciudades principales, vivieron durante las insurrecciones de 2002 protagonizadas por las fuerzas de la oposición. El estallido tuvo como motivación inmediata el rechazo a la decisión tomada por el CNE el día 24 de febrero en la tarde, una decisión dividida 3 a 2, mediante la cual se enviaban a la Comisión Técnica Superior para su revisión cerca de un millón 480 mil firmas. Esta decisión significaba una postergación, lo que por algunos grupos de la oposición fue entendido como una cancelación del revocatorio presidencial.

En este artículo presento la secuencia entre el 24 de febrero, cuando se producen las declaraciones oficiales del CNE, y el 5 de marzo cuando la violencia cesa, utilizando para ello de manera comparativa la información proporcionada por

---

<sup>1</sup> El “Plan Guarimba” fue una táctica política promovida por miembros del “Bloque Democrático”, organización política de la oposición que dejó de pertenecer a la Coordinadora Democrática por discrepancias en las vías para salir de Chávez. Circuló por meses por internet. Consiste en hacer “desobediencia civil” frente o cerca de tu hogar, bloqueando la vía con cualquier recurso (prendiendo fogatas, basura, objetos pesados, etc.). Cuando llegara la policía, los vecinos se resguardarían en sus casas o “guarimba”, para volver a salir una vez éstos se fueran. Se busca una ruptura máxima de la vida cotidiana con el objeto de propiciar la intervención de la Fuerza Armada. La similitud de lo que aconteció con lo indicado en estos mensajes hace pensar que tuvieron una conexión entre sí, aunque hasta ahora ésta ha sido negada.

distintos medios de comunicación social, casi todos ellos sesgados políticamente por la polarización imperante. A través de este acercamiento a la información, utilizando tanto medios sesgados de la oposición, como oficialistas y un medio de prensa más equilibrado, emergen rasgos de conducta polarizada por parte del gobierno y de la oposición que explican la virulencia de la protesta de esos días y la continuación de conductas insurreccionales por grupos de oposición. Argumento que este episodio si bien sugiere una repetición del comportamiento insurreccional de la oposición evidenciado desde el 2002, también pone de relieve algunas diferencias que parecieran apuntar a cambios en la correlación de fuerzas en la lucha hegemónica que se ha venido desarrollando en nuestro escenario sociopolítico.

#### Los acontecimientos<sup>2</sup>

El martes 24 de febrero de 2004, el CNE, a través de una transmisión en cadena de los medios audiovisuales, informó de la decisión tomada por la mayoría de los rectores de enviar a revisión ante la Comisión Técnica Superior a un conjunto de planillas contentivas de las firmas recogidas en noviembre por las fuerzas de oposición al gobierno, para convocar a un referendo revocatorio presidencial (El Nacional, 25-3-2004). La revisión se decidió al argumentar tres de los cinco rectores que estas solicitudes revelaban tener una caligrafía similar. Se calculaba que unas 148.190 planillas (con más de un millón 480 mil firmas) tenían esa característica, la cual no llenaba la exigencia de solicitud “personalísima” que se estableció en el estatuto que rigió el proceso. Esta decisión implicaba que la ansiada convocatoria al revocatorio presidencial quedaba postergada hasta que se dilucidara si estas firmas eran o no válidas. El CNE anunció que el fin de semana siguiente haría público el procedimiento que se aplicaría para el “reparo” de esas firmas, es decir, la ratificación o rechazo de las firmas en cuestión.

---

<sup>2</sup> Se utilizaron Últimas Noticias, El Nacional y El Universal, todos de cobertura nacional. Sólo el Últimas Noticias busca cierto equilibrio informativo; los otros son claramente sesgados para favorecer la información y opinión adversa al gobierno. También hago uso de notas mías sobre información de los canales de TV esos días y los siguientes. Cuando parece importante, señalo la fuente precisa.

Esa noche, el gobernador de Miranda -uno de los líderes más reconocidos de la oposición- al leer un comunicado de la Coordinadora Democrática (CD) en el canal noticioso privado Globovisión, llamó explícitamente a desconocer la decisión del CNE e iniciar una “desobediencia civil” (El Nacional, 25-2-2004). También se produjeron declaraciones de rebeldía al gobierno nacional por parte de gobernadores de oposición (entre ellos los de Yaracuy y Bolívar, ver Últimas Noticias, 5-3-2004). Por otra parte, el presidente y el secretario general del MAS, uno de los partidos de la CD, solicitaron el día 26 la renuncia de los 5 miembros del CNE pues los consideraban ya ilegítimos (El Nacional, 26-2-2004). Por su parte, esta CD, que es la estructura que contiene a la mayoría de las fuerzas opositoras, convocó para el viernes 27 a una marcha “pacífica” en protesta de la decisión, mientras las fuerzas del gobierno convocaban para otra el sábado 28.

El día de la marcha opositora coincidía con el desarrollo en Caracas de la reunión internacional de mandatarios del Grupo de los 15 (G15) en el Complejo Cultural Teresa Carreño, a poca distancia de la plaza Venezuela. Los grupos de la oposición pensaron aprovechar la realización de ese evento para denunciar la “traición” hecha por el CNE al pueblo venezolano con la decisión tomada. La CD informó de la ruta que seguiría la marcha a los órganos competentes, la cual saldría del Parque del Este a las 10.00 am y llegaría a la plaza Morelos en el oeste de la ciudad, a una distancia muy escasa del lugar donde se desarrollaba la reunión del G15. El ministro del Interior y Justicia informó de la inconveniencia de este lugar terminal de la ruta, e informó que tendrían permiso para llegar hasta la plaza Venezuela: “las adyacencias del teatro Teresa Carreño forman parte del anillo de seguridad con motivo de Cumbre del Grupo de los 15, que será inaugurada esta tarde” (El Nacional, 27-4-2004). Ante ésta y otras declaraciones de los entes de seguridad ciudadana, la CD ratificó que la movilización “mantendrá su ruta original” (Valero en El Nacional, 27-4-2004), y el alcalde mayor de la ciudad, de las filas de la oposición, otorgó su “permiso” contradiciendo al gobierno

central y al alcalde del municipio Libertador<sup>3</sup>. Con estos elementos se colocaron algunas condiciones para presagiar una marcha de alta naturaleza confrontacional.

La marcha avanzó sin problemas desde su punto de partida, pero, al entrar a la avenida Libertador y aproximarse al edificio de la CANTV, para desde allí tomar la vía para bajar a la plaza Morelos, fue contenida por la Guardia Nacional (GN), que comenzó a dispersarla con bombas lacrimógenas (El Nacional, 28-2-04). La Policía Metropolitana, que recibe órdenes del alcalde mayor que habría dado el permiso, no se presentó para constituir el primer cordón de seguridad entre marchantes y GN, como corresponde en estos casos (director del Cicpc, programa En Confianza, canal 8, 11-3-04). Los manifestantes se enfrentaban entonces directamente a la GN, retrocedían ante las embestidas con bombas lacrimógenas, sólo para volver a avanzar, produciéndose una situación altamente confrontacional que pronto se volvió violenta. Una casa del partido MVR cercana al lugar fue quemada por participantes de la marcha, se intentó incendiar también otro establecimiento aledaño a esta casa. Los manifestantes atacaban a la GN con piedras y palos, los guardias respondían con un número creciente de bombas lacrimógenas y perdigones. Se oyeron balaceras en la plaza Venezuela, donde se encontraba otro cordón de seguridad de la GN en prevención de que los manifestantes intentaran llegar a la plaza Morelos por esa vía. También se oyeron tiros cerca o detrás de la avenida Maripérez. Poco después de las 3 de la tarde la GN logró dispersar la protesta (El Nacional, 28-2-2004). Hasta la fecha el saldo oficial de muertos de esta marcha es uno, fallecido en la plaza Venezuela hacia las 4.00 pm, cuando un manifestante regresaba a su casa y recibió un balazo aparentemente desde un edificio (Provea, 12-3-04). Los heridos se contabilizaban sobre los 20 y hubo numerosos asfixiados, incluyendo niños de un preescolar (id.).

---

<sup>3</sup> Existe un conflicto de competencias en las leyes que rigen la materia en torno a cuál autoridad debe ser notificada de una protesta callejera. Esto ha sido aprovechado por la polarización política para desconocer en Caracas a aquellas autoridades que no comparten la misma posición de los que buscan protestar. Este es el caso de esta marcha, cuando el alcalde mayor otorga su visto bueno y el alcalde de Libertador y el Ejecutivo Nacional establecen límites para la movilización distintos a los presentados por los organizadores de la protesta (ver Provea, 2001-2002: 353).

A partir de este evento se desencadenaría una secuencia de protestas de alta confrontación, muchas de las cuales se tornarían violentas. Esa tarde comenzaron cierres parciales de vía en lugares neurálgicos del tránsito de la ciudad de Caracas. Vecinos, al llamado de voceros de la CD, daban cacerolazos y se apersonaban en arterias viales como la Ave. Fuerzas Armadas en el centro, la redoma de La India en el suroeste, la autopista Francisco Fajardo en el distribuidor Altamira en el este y la autopista Prados del Este a la altura de la urbanización Santa Fe en el sureste para obstaculizar el tránsito con la quema de neumáticos y bolsas de basura. Muy pronto, bajo cualquier excusa, terminaron trancando totalmente la vía. Esto trajo como consecuencia que personas en autos u otros vehículos trataran de pasar a la fuerza, mientras vecinos bloqueaban la vía a como diera lugar. En ese forcejeo se desencadenaron situaciones violentas, tirándose piedras y botellazos a carros y guardias nacionales. La GN tenía órdenes de usar sólo bombas lacrimógenas y perdigones, sin embargo, en algunos lugares se dice que hubo tiros. La CD, en las voces de los alcaldes de Chacao y Baruta -dirigentes ambos del partido Primero Justicia- no sólo no condenaron los hechos violentos, sino que hicieron un llamado a continuar en los días siguientes la protesta “pacífica”. En contraste, autoridades del gobierno condenaban la violencia de la oposición y felicitaban a la GN por su apego a una represión “profesional” a la Suiza (Rangel en Últimas Noticias, 28-2-04: 8).

El apoyo de la CD a la protesta, sin nunca condenar la violencia que en múltiples sitios tenía lugar, estimuló 5 días más de violencia en la ciudad de Caracas con un trágico saldo que hasta el momento de escribir esta reseña alcanza la cifra de 9 muertos y decenas de heridos (Provea, 12-3-2004). Una legitimación de la violencia en la protesta fue especialmente visible en las figuras del gobernador de Miranda (en las declaraciones ya señaladas) y en dos alcaldes de gobiernos municipales de Caracas que pertenecen a ese estado. Los alcaldes de Baruta y Chacao, se negaron a dar órdenes a sus cuerpos policiales para controlar las protestas en sus municipios, declararon como loable las mismas

argumentando que eran pacíficas, e incluso el alcalde de Chacao fue fotografiado en situación comprometida en estos disturbios (para fotos del alcalde López ver Aporrea, 28 y 29-02-04, la declaración de López y Capriles en Últimas Noticias, 2 y 4-3-04). Para el día 2 de marzo, ya se había normalizado el centro y oeste de Caracas, pero continuaron dos días más de disturbios en los municipios Chacao y Baruta, donde grupos organizados producían violentos enfrentamientos. Siempre con menos visibilidad y beligerancia, situaciones similares se repitieron en distintas ciudades del país, concentradas en áreas residenciales de sectores medios y altos o cerca de las sedes del CNE (Quinto Día, 6-3-04).

El día 2 en la tarde, el CNE informó sobre los resultados de la gestión de la Comisión Técnica Superior, según la cual pasarían a “reparo” unas 876.017 firmas. La Junta Nacional Electoral estableció además las bases del procedimiento a reparo. Enseguida declararon representantes del Centro Carter y de la OEA. Solicitaron respetar la decisión del CNE, aunque hicieron observaciones sobre criterios tomados por el CNE en torno a los mecanismos para reparar. Entendieron la “duda” que dijo tener el CNE sobre las planillas de similar caligrafía y exhortaron a las partes a seguir negociando toda vez que el proceso “no ha culminado” (en Últimas Noticias, 3-3-04). A partir de este momento la tensión comenzó a ceder. Al día siguiente, un grupo de organizaciones de la CD manifestó su disposición a lograr un acuerdo consensuado con el CNE a partir del cual accederían al proceso de “ratificación de firmas”. Otros grupos, liderados por el partido Proyecto Venezuela y Primero Justicia se negaban. Sin embargo, para el día 4 de marzo, Caracas y otras urbes del país comenzaron a recuperar la normalidad.

#### La conducta de los bloques políticos en pugna

Como emerge de la reconstrucción de los hechos, concurrieron a darle sus niveles de confrontación y violencia, las posiciones altamente polarizadas que sostienen los dos bloques políticos que vienen enfrentándose en Venezuela desde 2001. Como he señalado en anteriores oportunidades, en Venezuela se libra una

tenaz lucha hegemónica, sin que hasta la fecha haya una resolución cierta sobre cuáles grupos de actores y/o proyecto político predominará para consolidarse (López Maya, 2003).

Hasta la fecha, estos bloques que se asumen antagónicos apenas se reconocen con adversarios legales y legítimos. Por ello, las fuerzas de la oposición reunidas en la CD, en dos oportunidades del pasado inmediato, planearon estrategias insurreccionales –huelga general con golpe de Estado y paro sabotaje petrolero- con el propósito de derrocar al presidente Chávez y desplazar la alianza de fuerzas que lo respaldan de sus posiciones de poder. Los fracasos en estas acciones, si bien ha debilitado el piso político de estas fuerzas, no parece haber sido lo suficientemente contundente como para obligarlas a buscar una estrategia menos confrontacional y de más largo aliento. Las fuerzas de la oposición hasta la fecha siguen centradas casi de manera exclusiva en un solo objetivo político, vuelto obsesión: salir de Chávez como sea.

Por ello, la protesta que se da a partir del 27 de febrero de 2004, llamada por la oposición de “desobediencia activa” y conocida como “operación o plan guarimba”, guarda con las acciones insurreccionales previas algunas similitudes: hay mensajes iniciales por parte de líderes de la CD de desconocimiento de decisiones e instituciones del Estado; hay información constante y fuertemente sesgada a favor de la protesta en los medios de comunicación social; hay dirigentes de partidos de la CD que no condenan la violencia de las protestas, incluso algunos son vistos en situación comprometida con hechos violentos; se dan grupos radicalizados que presionan fuertemente por producir una represión de los cuerpos de seguridad. Hay fuerzas de la oposición que abrigan la expectativa, de que si la represión del Estado se desborda, pueda desembocarse en una situación límite, frente a la cual intervendría la Fuerza Armada para desplazar al gobierno –cumpliendo su rol de resguardo de la seguridad del Estado amenazado o de los ciudadanos– y/o se justificaría una intervención internacional, con la aplicación, por ejemplo, de la Carta Democrática de la OEA.

Por el lado del gobierno, durante estos eventos hubo manifiestas torpezas políticas, que añadieron leña al fuego de la violencia, permitiendo a las fuerzas de la oposición presentarse como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La marcha del 27 de febrero, concebida para generar tensiones y provocar al gobierno, logró su cometido al responder éste a los mensajes de la oposición con una acción represiva que pareció desmesurada, ocurriendo excesos policiales y dejando un saldo lamentable de víctimas y pérdidas materiales. El gobierno estaba especialmente sensibilizado, tanto porque las señales de altos dirigentes de la CD apuntaban a acciones de corte insurreccional, como porque su rol de anfitrión de 19 delegaciones internacionales (concurriendo, entre otros, los presidentes de Irán, Zimbabwe, Brasil y Argentina) le significaba un desafío importante en términos de la seguridad de éstos. Sin embargo, las actitudes posteriores de defensa y las alabanzas al desempeño de la GN ese y los días siguientes –como las declaraciones laudatorias del vicepresidente Rangel que señalamos arriba- sólo atizaron la indignación de los que protestaban y ampliaron su posible explotación política.

El largo expediente de abuso policial y militar que detentan tanto la GN como la PM y demás policías municipales (Ungar, 2003), debió precaver a las autoridades gubernamentales, ante denuncias reiteradas que se hicieron sobre el comportamiento de funcionarios de los cuerpos de seguridad esos días y las evidencias audiovisuales repetidas innumerables veces por canales de televisión de la oposición. Al respaldar el gobierno sin averiguar lo sucedido en distintos lugares y días, desestimó denuncias reales y con ello, las fuerzas de oposición obtuvieron alguno de los beneficios políticos que buscaban: llamar la atención internacional y dar sustento a lo que ellos han reiteradamente expresado sobre el gobierno venezolano, que es un gobierno dictatorial que irrespeta los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía. Aunque en días posteriores los informes de las organizaciones de derechos humanos señalan una



responsabilidad compartida entre gobierno y oposición en la violencia de esos días, y, así mismo, el gobierno ha rectificado su posición inicial, reconociendo abusos de funcionarios individualizados de la GN y prometiendo investigaciones a fondo y castigos a quienes resultaren responsables, las imágenes y declaraciones de esos primeros días dejaron huella.

Como comentario final

Dada la debilidad que en el ámbito interno evidencian actualmente los distintos actores políticos y sociales aglutinados en la CD, tanto por la pérdida de influencia en el Estado de sectores que en el pasado les proporcionaron importantes respaldos de naturaleza militar y petrolera –económica–, como por el escaso eco de sus convocatorias a protestas de calle evidenciados en los últimos meses, la estrategia de esos días pareció principalmente dirigida a buscar o fortalecer respaldos o intervenciones internacionales, que pudieran ejercer coacción sobre la política doméstica a favor de sus objetivos de sacar a Chávez como sea. En tal sentido, es siempre necesario enfatizar que la oposición mantiene un poder mediático considerable, vinculado a transnacionales de la comunicación, y ha ganado batallas en el terreno internacional convenciendo a gobiernos y actores internacionales de la ilegitimidad del gobierno venezolano, o de la naturaleza antidemocrática de su gestión, a través de informaciones manipuladas y en ocasiones falsas (ver, por ej., el caso de quienes disparaban en Puente Llaguno en *La revolución no será televisada*). Igualmente, los actores de oposición mantienen un activo lobby en el gobierno de EEUU buscando constantemente que éste, que los ha respaldado en distintas ocasiones tanto verbalmente como con acciones explícitas, mantenga ese respaldo, o que incluso intervenga directamente a su favor (ver, entre otros, Lander, 2002).

El gobierno tuvo un deficiente desempeño ante esta modalidad de protesta confrontacional y violenta de la oposición. La politización de las policías regionales y municipales, conjuntamente con sus históricas debilidades en lo que atañe a su

respeto a la vida e integridad física de quienes protestan, el también cuestionable expediente pasado de la GN en estos menesteres, hace muy vulnerable y delicado los intentos de las autoridades, especialmente del gobierno central, que se ve obligado a contener las protestas sacando a la GN y a la policía militar –pues la PM depende de la opositora alcaldía mayor y actúa en resguardo de esos intereses–, por mantener en los límites del Estado de derecho sus respuestas ante estas confrontaciones. Por otra parte, la fortaleza de los sectores de oposición, en términos de los recursos económicos y mediáticos de que disponen, y sobre todo por la politización y polarización de otras instituciones claves del Estado de derecho, como el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, ha hecho muy difícil para el gobierno evitar que se repitan estos episodios insurreccionales por la impunidad que luego tiene lugar. Esta impunidad a su vez, crea condiciones para que los grupos que apoyan o son afines al gobierno se sientan en desventaja, tendiendo a endurecer sus posiciones, cerrarse al diálogo y quizás prepararse también para emprender acciones violentas.

En las semanas siguientes de este episodio, grupos de la oposición llevaron la disputa sobre las firmas a instancias del Poder Judicial, donde hasta la fecha se ha producido un impasse de resolución impredecible, haciéndose nuevamente evidente la polarización que ha invadido ese poder público. Esta estrategia parece buscar, por parte de algunos grupos, demorar y, de ser posible, crear una crisis en la institución judicial, que añada a las debilidades del gobierno actual, un nuevo conflicto, que tiene a instancias nacionales o internacionales a buscar una salida extra institucional a la difícil situación venezolana. Funcionarios del gobierno de Bush, para mencionar un ejemplo reciente y muy preocupante en esa dirección, han venido comparado la situación venezolana con Haití.

El proceso sociopolítico venezolano por estos hechos recientes parece estar entrando en una nueva fase. Las salidas insurreccionales, aunque siguen intentándose, son menos frontales, y en vez de atacar directamente al Presidente, están dirigiendo también sus baterías contra otras instituciones, como el CNE, al

que buscan deslegitimar o el Tribunal Supremo que buscan colapsar propiciando conflictos de competencias entre las salas. Como hasta la fecha, la Fuerza Armada no responde a las solicitudes que estos grupos le hacen reiteradamente para que deponga al gobierno, las acciones tienden a desplazar su foco de interés hacia el escenario y actores internacionales, que buscan polarizar para facilitar una intervención foránea. Mientras tanto, internamente, la situación del referendo revocatorio se vislumbra incierta y tiende a posponerse su convocatoria. En este caso, intereses tanto de algunos sectores de la oposición como del gobierno estarían jugando la carta de realizar antes las elecciones regionales y municipales para dilucidar allí la correlación de fuerzas, antes de enfrentarse a un revocatorio que implica riesgos políticos muy costosos para ambos bloques.

He señalado en anteriores oportunidades, que el referendo revocatorio, como una salida “constitucional” a la actual confrontación y violencia políticas que se vive en Venezuela, si bien está apegada a derecho, en una situación como la que se vive actualmente, es políticamente una estrategia perniciosa, que sólo acentúa la polarización política, alejando la posibilidad de que los venezolanos encuentren espacios de debate y creación de compromisos, que permitan el restablecimiento de la convivencia pacífica. La jugada política de otros sectores de oposición –principalmente Primero Justicia– de haber desplazado las decisiones del CNE hacia el Tribunal Supremo de Justicia, cuando parecía cercana una salida negociada a las planillas “planas” entre gobierno y grupos de la oposición, no ha dejado de confirmarme que esta jugada es una maniobra más para no solucionar el conflicto político, buscando que el desgaste permanente promueva una salida reñida con la democracia. Por lo pronto, las demoras postergan una decisión en relación a las firmas, mientras avanza el calendario hacia las elecciones regionales y municipales programadas para el primero de agosto. Éstas, si bien se desarrollarán en un clima de polarización significativo, de todos modos, por las características que le son inherentes, permitirán una apertura a situaciones políticas más plurales y por ello, espacios propicios al reconocimiento del otro, al debate y quizás a la distensión y negociación.

## Referencias

- Provea (2001-2002): *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual*, Caracas, Provea.
- Lander, Edgardo (2002): "El papel del gobierno de los EEUU en el golpe de Estado contra el Presidente Chávez" en *Observatorio Social de América Latina*, n° 7, junio, pp. 5-10.
- López Maya, Margarita (2003): "Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia" en Medófilo Medina y Margarita López Maya, *Venezuela: confrontación social y polarización política*, Bogotá, Ediciones Aurora.
- Ungar, Mark (2003): "La policía venezolana: el camino peligroso de la politización", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 3, pp. 205-230.
- Diarios *El Nacional*, *El Universal* y *Últimas Noticias*, y semanario *Quinto Día*, artículos señalados en el texto.